

**Titular.** – Sanidad para indocumentados: 187 euros la urgencia

**Subtítulo.** – Gran disparidad de respuestas en los mostradores hospitalarios de Mallorca // El miedo sigue patente en los rostros de los inmigrantes sin papeles

**Entradilla.** Le sudan las manos. Mira hacia un lado del interminable pasillo blanco del hospital de Son Espases y después hacia el otro, no sabe a dónde ir. El temor y la incertidumbre recorren su cuerpo una y otra vez. Avanza despacio hacia el mostrador de urgencias. « Buenas tardes, tengo un dolor agudo en el pecho desde hace algunas semanas que me dificulta la respiración ». « Vale, me deja su documentación por favor », le responde la administradora. Hassan se queda callado y el pánico se apodera de él. Este musulmán lleva seis meses viviendo en Mallorca de manera irregular. « No tengo documentación », le contesta con voz quebrada. Se produce un silencio, para Hassan, interminable. Mientras tanto, la chica le mira de arriba abajo. Entonces deberá rellenar este formulario con sus datos personales. El joven musulmán, de 27 años, se lee las preguntas: nombre, edad, sexo, país de origen, domicilio, contacto – empieza a temblarle el pulso –, grupo étnico, tiempo de residencia en España, migraciones anteriores, ha recibido asistencia sanitaria otras veces en España, tiene alguna patología, etc. Hassan mira los tres folios que debe rellenar asustado por lo que le pueda pasar. 'Facturación' es la palabra clave que hace que el musulmán quiera salir corriendo del hospital sin mirar atrás. Según el BOIB, una realización una ecografía cuesta 55 euros, recibir asistencia ambulatoria 113 euros y una intervención quirúrgica hasta 800 euros.

**Cuerpo. María, Palma.** – Desprotegidos y sin acceso al sistema sanitario. Así es como se encuentran tanto Hassan como otros 20.000 inmigrantes en Baleares a consecuencia de la retirada de las tarjetas sanitarias en aplicación del Real Decreto del Gobierno de 1 de septiembre de 2012, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una medida para la que la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, tenía previsto ahorrar unos 500 millones de euros en toda España. Según el Ejecutivo del Partido Popular, con esta ley se pretendía evitar el fraude en la obtención de la tarjeta sanitaria española. Para Médicos del Mundo, en cambio, la norma constituye una violación del derecho a la salud de las personas inmigrantes que viven en España, al ser un código regresivo y discriminatorio prohibido por los estándares internacionales de derechos humanos.

En concreto, Baleares es la comunidad autónoma más estricta con la aplicación del Real Decreto. Así lo ha decidido el presidente del Govern, José Ramón Bauzá. Los inmigrantes sin papeles tan solo reciben asistencia sanitaria gratuita en cuatro circunstancias: en caso de accidente grave, atención a enfermedades graves, asistencia a mujeres embarazadas y a los menores de edad. No obstante, la confusión en Baleares no deriva simplemente de la aplicación de la norma del Gobierno sino también de la enorme disparidad de respuestas dentro de la administración balear. De este modo, el miedo, la inquietud y la desconfianza se vive tanto en los hogares de los inmigrantes sin papeles como en las consultas y pasillos de los diferentes hospitales de la isla.

### **Dos años y medio después del Real Decreto**

« La asistencia sanitaria en los hospitales mallorquines es universal, en ningún caso se niega atender a un enfermo », afirma la jefa de atención al paciente de Son Espases, Ángela Tumbarello. La orden de no atender a nadie se ha ido disolviendo con los años gracias al trabajo de los facultativos, los trabajadores sociales de los centros médicos y las diferentes ONGs como Médicos del Mundo. La frase « lo sentimos, no podemos atenderle » ha desaparecido de los hospitales. Ahora, en las paredes blancas del centro hospitalario retumba « rellene este formulario con sus datos personales y espere a que le llamen ». Según explica Tumbarello, trabajadora social de formación, gracias a la cláusula de urgencias que contempla la norma han podido atender a todos los inmigrantes sin papeles viéndose amparados por la ley. « Este apartado nos dio mucho juego y nos permitió ayudar a un colectivo que estaba excluido por el Real Decreto », declara la trabajadora social que también es inmigrante – de origen argentino, esta mujer lleva más de 25 años viviendo en España y trabajando para este país.

El pánico que sienten los inmigrantes al poner un pie dentro del centro hospitalario es aún demasiado grande. Y es que aunque a día de hoy no se le niega a nadie la asistencia sanitaria – así lo han declarado múltiples médicos, enfermeros y trabajadores sociales de diferentes centros de la isla– los inmigrantes no se fían. Tienen miedo a que su caso salga de esas cuatro paredes. Y ese es el mayor temor de los trabajadores sociales. « Yo temo que ahí fuera haya inmigrantes enfermos sin recursos que no vienen a pedir ayuda por miedo a ser pillados », confiesa Tumbarello. El departamento de atención al cliente no es el enemigo de los inmigrantes sino su aliado. Una mano de apoyo que pocos cogen para continuar su camino, según el coordinador de Médicos del Mundo, Francisco Garrido, porque es una ayuda invisible. Aún así, la jefa del departamento declara que su trabajo principal es ayudar a este colectivo legalizando su situación en España, en ningún caso – y remarca esta parte – pasan el informe a nadie.

En un primer momento, la ley establecía que este colectivo vulnerable sería atendido de urgencias en los hospitales de las islas pagando por esos servicios una vez acabado el proceso. 'Facturación', una palabra de once letras insignificante para algunos y temerosa para otros. Llega un momento que escuchar « y ahora debe pagar » provoca la desesperación máxima en los inmigrantes sin papeles. «No tengo un trabajo estable porque no tengo papeles, y sin trabajo, no tengo dinero casi para comer imagínate para pagar por los servicios sanitarios », explica Hassan, a quien le parece una medida desmesurada y le aterra la idea de ponerse enfermo. Según el BOIB, una de las intervenciones más caras son la de estómago por un valor de 22.000 euros o la de médula ósea que ronda los 100.000. Unas cifras abrumadoras que deberían ser pagadas por este colectivo.

Según ha declarado otra trabajadora social de Son Espases, Iruhe Saraverry, ahora mismo el proceso está parado. « Así como un día lo ponen otro día lo quitan », afirma la joven. Algo que tiene totalmente despistados a los trabajadores del área médica. Según describe la trabajadora social especialista en el área de infecciosas, todo esto son medidas políticas que van cambiando a medida que se acercan las elecciones. « Ahora mismo, en época preelectoral, al gobierno de Bauzá no le conviene que haya revuelo entre los ciudadanos, por ello el proceso está parado, ¿por cuánto tiempo? probablemente hasta que vuelvan a ganar las elecciones », afirma la chica.

### **¿De verdad fue una cuestión económica?**

Tanto a nivel nacional como regional el partido popular declaró en 2012 que el Real Decreto era una medida para recortar gastos en sanidad. Después de dos años y medio desde la implantación de la ley, ningún político del PP ha sabido dar una cifra aproximada del dinero ahorrado por la norma. Los diferentes componentes de la oposición han presionado al partido sin obtener respuesta. Biel Barceló, actual portavoz del grupo parlamentario Bloc per Mallorca, confiesa haber pedido en numerosas ocasiones datos sobre ese supuesto ahorro con la retirada de las tarjetas y el gobierno de Bauzá ha sido incapaz de darle una cifra, según él, porque no existe ningún ahorro. « Al fin y al cabo, la norma fue una cuestión ideológica y no económica como nos quisieron hacer creer » afirma Saraverry muy convencida.

« No tiene sentido » asegura Iruhe con rotundidad. Según la trabajadora social, – que lleva más de quince años trabajando en esto –, tener a una persona ingresada en un hospital es mucho más caro para el sistema que proporcionar un médico de cabecera. En muchos casos, el facultativo prevendría la enfermedad y el paciente no llegaría a ingresar, explica Saraverry. « Si en teoría lo han hecho para ahorrar han conseguido todo lo contrario» manifiesta la trabajadora del hospital de Mallorca y también lo corrobora el coordinador de Médicos del Mundo. La población española está desinformada en cuanto al flujo de inmigración y predominan los prejuicios hacia este colectivo vulnerable. «El mayor problema de España no son los inmigrantes musulmanes o sudamericanos sino los europeos que abusan de nuestro sistema sanitario», constata por su parte la jefa del departamento de Son Espases.

Los miembros de los países europeos disponen de una tarjeta sanitaria que les sirve para utilizar la sanidad en todo el territorio de la Unión Europea. De esta manera España, al tener uno de los sistemas sanitarios más completos, sufre abusos por parte de este colectivo. « Nuestra sanidad es completísima, no existe el copago, y lo cubrimos todo, te atendemos desde una tontería hasta una cirugía cardíaca de los más sofisticada y sin demora, y eso ocupa un porcentaje mucho mayor que los inmigrantes sin papeles », declara la jefa del departamento.

Así, la diferencia entre inmigrantes y turismo sanitario es clara y, aunque el gobierno ha querido frenar los abusos en sanidad, para muchos esta medida ha sido desacertada. Según Saraberry, la gente que trabaja y paga sus impuestos españoles – ya que la sanidad no se financia a través de la seguridad social sino a través de los impuestos – no se les puede dejar excluidos. « No podemos hacer que no existen y mirar hacia otro lado » declara. « Entiendo que exista un límite pero para la sanidad de turismo no para un musulmán que, por ejemplo, cuando va a comprar ya contribuye en pagar ese IVA » afirma la joven. No es una cuestión de colapso o abuso de ayudas como muchos españoles piensan – para recibir una ayuda se requiere tener documentación, estar regularizado y llevar como mínimo 5 años residiendo legalmente en España –, explica, sino un derecho universal del que nadie puede ser privado.

« Es todo como muy difuso. Parece que quieren que la sociedad sea racista y los rechace » declara Saraberry. Según la trabajadora social, en España a lo largo de los años se ha utilizado a los inmigrantes: « cuando las cosas van bien les queremos para que realicen los trabajos que a nosotros no nos gustan, y cuando las cosas van mal los queremos echar sin miramiento. Las cosas no funcionan así ».

« Para mí, todas las personas somos iguales, ya sean blancos, negros, de izquierdas o de derechas » afirma un médico de cabecera de Mallorca que se niega a dar su nombre. Según el facultativo, no cree que se deba privar a nadie del derecho a ir al médico de manera gratuita ya que enfermarse no es una decisión voluntaria. Además, el profesional de medicina apunta que esta nueva ley demuestra la politización que se ejerce sobre la sanidad pública en España. « Hoy en día no solo estamos pasando por una crisis económica sino también política, ¿dónde está la democracia en esta ley? » expone el facultativo, que califica el Real Decreto como algo lamentable. El doctor incide en que los políticos no son conscientes del sufrimiento de los inmigrantes. « Ellos se basan en estar en sus despachos, bien trajeados, sin hacer nada, mientras los médicos somos los que estamos al pie del cañón viendo el sufrimiento de este colectivo » señala el médico de cabecera enfadado.

### **Diferentes colectivos siguen en pie de guerra**

Después de dos largos años de lucha por la modificación del Real Decreto, Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Red Acoge y CERS denuncian que España ha incumplido las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que pedían la reforma de la norma, devolviéndoles el acceso sanitario a los inmigrante sin papeles de manera legal.

Algunos médicos de Mallorca se encuentran con la tesitura de seguir sus principios o cumplir sus obligaciones. Para la dirección de IB-Salut, en cambio, los profesionales de la medicina no deberían tener ningún dilema ético con la aplicación del Real Decreto. « Lo que está claro es que la norma es de ámbito nacional y de obligado cumplimiento », afirman. Según la dirección de IB-Salut, la comunidad autónoma de las Islas Baleares lo único que ha hecho con esta ley ha sido adaptarla y ampliar los cinco supuestos con todas las enfermedades de salud pública y los trastornos mentales graves. Unas declaraciones realizadas por mail que conforman un párrafo y no contestan a las cuestiones planteadas.

El Sindicato de Enfermería de Baleares, por su parte, defiende que todo el mundo debe tener derecho a acceder a un sistema sanitario público, universal y gratuito – remarcan esta parte. Según el propio sindicato, desde el primer momento se posicionaron en contra del decreto que nació sin participación, sin consenso y sin apoyos. « Dejar a los colectivos sociales más vulnerables sin poder acudir al sistema sanitario en condiciones de igualdad constituye un atentado a la universalidad del sistema », afirman. « Nos venden que el sistema sanitario público español es caro pero es uno de los más baratos de Europa », subraya el sindicato. Además, añaden que cada medida que se toma para economizar supone una carga añadida de trabajo sobre los profesionales.

Esta medida creó un gran revuelo al inicio de su implantación. Casi tres años después, los diferentes colectivos de la sociedad siguen en pie de guerra para que se derogue la ley. Así lo ha hecho saber el PSOE, partido que considera que esta ley « difícilmente va a solucionar el problema social y sanitario creado con la exclusión de españoles y de inmigrantes », porque « el coste de la póliza es inasumible para muchas personas y muchas familias », y ni siquiera « cubre las prestaciones de la cartera común suplementaria ». Los socialistas han insistido en que, en lugar de facilitar el acceso a los servicios médicos, el Gobierno ha creado una « barrera más », prueba de que en España « la sanidad no es universal ni gratuita ».

El Real Decreto es una medida que ha sido definida como algo « lamentable », « vergonzosa », que « atenta contra la dignidad humana y los derechos humanos », y con la que mucha gente – facultativos, trabajadores sociales incluso la sociedad – se muestra en contra. El problema no es que los inmigrantes no reciben asistencia sanitaria porque todo aquel que la necesita la tiene sin ningún problema en los centros hospitalarios de Mallorca – o eso es lo que han declarado diferentes sanitarios. Lo que le preocupa a Médicos del Mundo y otros trabajadores sociales es que los inmigrantes no vayan al médico por miedo a ser pillados. Temor, angustia, incluso pavor, son los sentimientos más comunes en los inmigrantes. « Hasta que no consiga legalizarme en España no voy a vivir tranquilo », confiesa Hassan con rostro compungido. ¿Cuándo va a poder legalizar su situación?, es toda una incógnita, al igual que la derogación total de la ley.